

ARTICULOS

LA OFERTA POLITICA DE DUARTE

Ignacio Martín-Baró

RESUMEN

Ni Duarte ni la democracia cristiana han planteado al país un programa político; sin embargo, Duarte ha ido presentando una oferta al pueblo salvadoreño a través de sus discursos. En un comienzo, esta oferta podía sintetizarse en un doble objetivo: la pacificación y el desarrollo económico. Más recientemente, el propio Duarte ha sintetizado su oferta en cinco grandes políticas: humanización, pacificación, democratización, participación y reactivación económica. El presente análisis pretende determinar cuál es el contenido exacto que se puede dar a esos términos, tan cargados ideológicamente. Aparecen así algunas inconsistencias, sobre todo en lo concerniente a la política de respeto a los derechos humanos, la realización de las reformas y la participación ofrecida a todos los sectores sociales. Estas inconsistencias llevan a cuestionarse sobre si la oferta política de Duarte es ambigua por falta de claridad acerca de lo que se pretende o por falta de poder para realizarlo. Si así fuera, la oferta de Duarte constituiría el necesario maquillaje del proyecto norteamericano de reafirmar su control hegemónico sobre el país y eliminar el reto revolucionario.

Aunque el Ing. José Napoleón Duarte ha sido propenso a hacer declaraciones o a conceder entrevistas periodísticas, ni él ni su partido, la democracia cristiana, ha planteado al pueblo salvadoreño un programa de gobierno que exprese con claridad los objetivos prioritarios que se proponen, articulando las formas como pretenden alcanzarlos y los plazos en que estiman poderlos lograr. Con todo, Duarte ha ido presentando al país una oferta política, cuyos términos se en-

cuentran esbozados en una serie de discursos —no muchos— de naturaleza muy diversa. El más importante de esos discursos es, por supuesto, el mensaje dirigido a la nación al asumir la presidencia de la república, el primero de junio de 1984. Segundo en importancia es el discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de octubre de 1984. Finalmente, Duarte ha tenido otros discursos, de carácter más limitado y sectorial, pero que sirven

para precisar algunos de los elementos de su oferta política.

Es importante subrayar que este análisis no pretende establecer un juicio ni sobre el valor ni sobre la credibilidad de la oferta política de Duarte; se pretende, simplemente, comprenderla en los términos más fieles posibles y examinar su coherencia interna. Será el contraste de esta oferta con las realizaciones del gobierno de Duarte el que establezca un juicio histórico sobre la veracidad y bondad de su oferta política, hecha en un momento en que el pueblo salvadoreño debate con las armas el destino de la nación.

1. LOS DISCURSOS DE DUARTE

1.1. El discurso inaugural

Por lo general, el discurso que se pronuncia en el acto inaugural de un período presidencial plantea los grandes objetivos que un determinado gobierno pretende alcanzar, así como la jerarquía de esos objetivos. La propuesta que Duarte hizo en su primer discurso como presidente puede sintetizarse en cuatro puntos de política interna y uno de política internacional.

a) El logro de la paz

La característica más significativa de la situación actual del país la constituye el estado de guerra en que se encuentra, el "conflicto armado que afecta a todos y a cada uno de nosotros." Sobre la guerra, Duarte hace dos juicios: 1) que ha sido desencadenada por un ejército invasor, entrenado y armado "con la ayuda de gobiernos marxistas," y cuyas "acciones son dirigidas desde el exterior;" 2) que la Fuerza Armada "no ha logrado todavía derrotar a la guerrilla" porque el pueblo salvadoreño "no ha actuado en la dinámica junto a la Fuerza Armada."

A partir de ese diagnóstico, Duarte ofrece entrar en un diálogo y negociación de paz, que contemplaría dos fases: una preliminar, en la que se propiciaría "un clima de seguridad y confianza," y una segunda, en la que se dialogaría con "todas las fuerzas democráticas y los sectores mayoritarios" a fin de elaborar entre todos una fórmula de paz genuina.

b) El pacto social

Aunque el conflicto armado ha sido desencadenado desde el exterior, "la crisis que actualmente afrontamos tiene su origen en las estructu-

ras desiguales" del país, que deben reformarse si se quiere lograr la paz. Este cambio supone, como eje articulador, el establecimiento de "instituciones participativas que garanticen el respeto a los derechos de todo individuo."

En consecuencia, Duarte ofrece un pacto social que constituiría "el fundamento esencial" de su plan de gobierno y con el cual se buscaría "la participación solidaria de todos los sectores de la sociedad salvadoreña." Esta participación se posibilitaría mediante el fomento del "ejército democrático," el estímulo a "la libre emisión del pensamiento, los derechos individuales y sociales," y el fortalecimiento de los gobiernos locales.

c) Desarrollo económico

Como elemento esencial para el logro de la paz, Duarte propone el impulso al desarrollo y a la recuperación económica. El desarrollo se buscaría fundamentalmente en dos direcciones: por un lado, mediante el fortalecimiento de las reformas iniciadas (agraria y bancaria) y, por otro, mediante la protección y el fomento de "un sector privado fuerte" que colabore armoniosamente con el sector público.

d) Vigencia integral de los derechos humanos

Frente a la situación de represión y violencia institucional existente en el país, Duarte promete establecer un estado de respeto integral a los derechos humanos. Para lograr ese objetivo, se propone dos líneas de acción: a) "controlar los abusos de autoridad y la violencia de las extremas, los escuadrones de la muerte y todos los problemas de injusticia y prepotencia que se manifiesten;" b) erradicar la corrupción, sobre todo en la administración pública.

"Nadie podrá decir —afirma enfáticamente Duarte— que este gobierno ha violado los derechos fundamentales de mi pueblo y quien lo intente recibirá todo el peso de la ley." Cabe asumir que el peso de la ley es prometido a quien viole los derechos humanos y no a quien acuse al gobierno de violarlos, aunque la afirmación es ambigua.

e) Política exterior

Sólo dos grandes proposiciones hace Duarte respecto a la política exterior que observará su gobierno: 1) "absoluta independencia" y 2) "apoyo a los esfuerzos del grupo de Contadora."



Los discursos de Duarte dejan la amarga sensación de un cúmulo de palabras sin contenido.

En síntesis, frente a la situación de guerra originada en las estructuras injustas del país, pero desencadenada por una invasión apoyada por gobiernos marxistas, Duarte ofrece una fórmula de paz y desarrollo:

1. La paz se lograría mediante:
 - a) un clima nuevo de seguridad garantizado por la Fuerza Armada y que permitiría el ejercicio democrático;
 - b) el inicio de un diálogo con todos los sectores del país;
 - c) respeto a los derechos humanos.
2. El desarrollo se buscaría mediante:
 - a) el afianzamiento de las reformas ya iniciadas;
 - b) el estímulo a la empresa privada.

El planteamiento de Duarte presenta dos dilemas: uno militar y otro económico. El dilema militar consiste en que, para lograr el "clima de seguridad" previo al diálogo, haría falta incrementar masivamente el poder de la Fuerza Armada a fin de anular la "subversión" guerrillera;

ahora bien, para eliminar "los abusos de autoridad" sería necesario someter a la Fuerza Armada al control del sistema de justicia y, por lo tanto, limitar su poder de hecho. El dilema estriba, pues, en cómo aumentar el poder de la Fuerza Armada y al mismo tiempo depurarla de sus "abusos" y ponerla bajo control.

El dilema económico consiste en el doble objetivo de estimular y fortalecer el sector privado, mientras se estimula y fortalece también al sector "reformado." En principio, no se ve por qué estas dos metas habrían de oponerse; sin embargo, la naturaleza de las estructuras socioeconómicas del país y, sobre todo, las prácticas tradicionales y la magnitud de las exigencias del capital privado salvadoreño hacen del crecimiento nacional un proceso "de suma cero," socialmente conflictivo.

1.2. El discurso ante las Naciones Unidas

El discurso pronunciado por Duarte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de

octubre de 1984 tiene dos partes claramente distintas: una, aquella en que plantea las raíces ancestrales de la guerra en El Salvador así como el proceso seguido desde el pacto de la Fuerza Armada y el Partido Demócrata Cristiano; otra, aquella en que, cambiando de tenor y tono, ofrece un inmediato diálogo con los líderes insurgentes. En términos políticos, el discurso se puede sintetizar en dos puntos: a) el diagnóstico sobre la situación salvadoreña, y b) la oferta de diálogo.

a) El diagnóstico que presenta Duarte ante las Naciones Unidas sobre El Salvador resulta significativamente distinto que el planteado en su discurso inaugural: dejando de lado la apelación a la "invasión" promovida por gobiernos marxistas, se buscan las raíces de la guerra en la secular historia de injusticia y opresión que ha caracterizado al país. "Frente al cierre de la alternativa democrática y a la imposibilidad de cambiar las estructuras económicas, se fortaleció la tesis de la violencia como la única vía para la liberación del pueblo salvadoreño."

Según Duarte, sólo la democracia cristiana habría creído en la posibilidad de una solución pacífica para la crisis, en una "revolución democrática." Y así, en alianza con la Fuerza Armada, habría iniciado en 1980 aquellas reformas económicas (reforma agraria y bancaria), políticas (cambio de la Fuerza Armada, elecciones libres) y sociales (participación de todos los sectores en el ejercicio democrático y respeto a los derechos humanos) que estarían cambiando la realidad del país. De ahí la afirmación básica de Duarte: en El Salvador existe una nueva realidad, totalmente distinta de la que parecía justificar la opción armada. "Hoy en nuestra Patria se respira un aire de libertad... Hoy existe una sociedad diferente en El Salvador."

b) Sobre la base de ese diagnóstico acerca de los orígenes del conflicto armado y el cambio esencial de la situación del país, Duarte ofrece a los insurgentes el inicio de un diálogo que prepare las condiciones necesarias para "la próxima consulta popular." De esta manera, pretende dar cumplimiento a "la principal misión" de su mandato presidencial que consiste en "lograr y obtener la armonía social y la paz interior de la República." Adicionalmente, ofrece "una amnistía general para los delitos políticos" y garantiza "un espacio político dentro del esquema democrático pluralista y constitucional" que harían innecesaria y antihistórica la vía armada.

Si en su primer discurso el énfasis sobre la guerra estaba en su origen extrínseco (planteamiento idéntico casi letra por letra al mantenido por la administración norteamericana de Reagan), en este discurso el énfasis está en que las causas fueron internas, pero ya han sido suprimidas por las reformas y cambios llevados a cabo en los cinco últimos años. Así, en ambos casos se rechaza la racionalidad y justicia *actual* de la lucha insurgente, aunque el último planteamiento reconoce que, en principio al menos, el levantamiento en armas estuvo justificado. En este sentido, Duarte parece asumir que ya ha conseguido el objetivo de la primera fase de su oferta de paz, "un clima de seguridad," y, por tanto, que puede proceder a la segunda, invitando a un diálogo a las fuerzas insurgentes para que se incorporen al "proceso hacia la democracia, la paz y la justicia social."

1.3. Discurso ante el Seminario Nacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural

El 25 de enero de 1985, Duarte aprovechó la realización de un Seminario sobre Reforma Agraria para exponer algunos aspectos económicos de su oferta política. Sin duda, se trata de un discurso "menor" en comparación con los pronunciados en la toma de posesión o ante la asamblea de la ONU; sin embargo, tiene importancia puesto que en él concreta algo más su política agraria, que constituye el eje de la economía salvadoreña y, por tanto, de la "nueva economía del modelo social que permite la justicia."

La tesis fundamental de este discurso estriba en concebir desarrollo y paz como elementos mutuamente necesitados: "no podrá haber paz estable sin desarrollo y el desarrollo estará mutilado sin la paz." El desarrollo es definido así como "crecimiento, pero, además, es redistribución del ingreso de la riqueza nacional, participación a todos los niveles de la sociedad y reorientación del poder político y social en favor de las mayorías nacionales." Según Duarte, la reforma agraria iniciada en 1980 constituiría un programa integral de desarrollo que habría cambiado y significativamente la vida de una buena parte del campesinado salvadoreño.

De los cuatro aspectos que componen la definición de desarrollo enunciada por Duarte, dos reciben particular atención en este discurso: la participación y el crecimiento.

La participación del campesino es afirmada

como uno de los logros ya alcanzados por el presente gobierno: "hoy somos un gobierno trabajando junto a los campesinos y sus dirigentes." Ello demostraría también el cambio de la situación para "las mayorías" nacionales: "en ningún país de América Central y América del Sur se encuentra un número tan significativo de campesinos participando responsablemente y laboriosamente en tareas gubernamentales." Con todo, Duarte parece propugnar una participación todavía más articulada desde las bases: "queremos que se establezca efectivamente la co-gestión y se abra paso rápida y aceleradamente a la autogestión de las cooperativas y de los beneficiarios."

El otro aspecto del desarrollo al que Duarte presta particular atención es el crecimiento económico. Se trata, por un lado, de poner a producir todas las tierras al máximo de su capacidad. Pero, sobre todo, se trata de que crezca la capacidad empresarial, lo que le lleva a calificar la incorporación del campesino a la reforma agraria como desarrollo del sector privado: "hoy si crece el sector privado con 100,000 nuevos empresarios asociativos e individuales."

Al poner juntos estos dos aspectos, se puede afirmar que Duarte espera promover el desarrollo del país mediante una creciente incorporación de "las mayorías" y, en concreto, del campesinado a la actividad económica y social propia del empresario privado. La "nueva economía del modelo social" consistiría, por tanto, en una ampliación del sector privado, que incluiría a propietarios cooperativistas en régimen de co-gestión o de autogestión.

1.4. Discurso inaugural de "EXPICA 85"

El último discurso de Duarte que vamos a considerar es el tenido el 4 de mayo de 1985, al inaugurar la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (EXPICA 85) y en el que se centró, de nuevo, en su política económica. En este discurso, Duarte asume como interlocutor al sector ganadero cuyas inquietudes pretende calmar. Dos son los puntos centrales de su exposición: la seguridad para el inversionista y el apoyo de su gobierno a la iniciativa privada.

La primera inquietud que Duarte trata de di-

visar es la queja de que el proceder gubernamental en los últimos años habría generado un clima de inseguridad para los inversionistas, quienes se mostrarían reticentes a poner su dinero a trabajar en el país. De fondo parece estar el temor a que el gobierno demócrata cristiano, sobre todo después de las elecciones que le dieron la mayoría en la asamblea legislativa, trate de llevar adelante la segunda fase de la reforma agraria o de iniciar otros procesos de cambio socioeconómico. La respuesta de Duarte es categórica: "el país ha entrado en un estado total de derecho" y "las reformas han establecido los marcos, las referencias y los límites en los casos específicos concernientes a la tenencia de la tierra." Tras la fórmula legal, parece expresarse la garantía a terratenientes y empresarios privados de que no habrá más cambios y que el gobierno se mantendrá dentro del ámbito de las reformas ya establecidas.

El segundo punto expuesto por Duarte es complementario del anterior: no sólo no va a haber ya más reformas "estabilizadoras," sino que el énfasis se va a poner en el apoyo a la empresa privada. "Quiero aclarar categóricamente, una vez más, que este gobierno que presido es garante, apoya y está consciente que la iniciativa privada es fundamental en la economía de la nación." Por ello, todos los agricultores y ganaderos deben dedicarse a intensificar su producción como parte vital de la economía del país.

Duarte concluye la parte medular de su discurso enunciando sin mayor explicación lo que llama "las cinco grandes políticas de la nación:" "la humanización del país, la pacificación de la patria, la democratización, la participación de todos y, por supuesto, la reactivación económica."

2. LA OFERTA POLITICA DE DUARTE

2.1. Los términos de la oferta

Como se decía al comienzo de este análisis, es claro que los objetivos planteados por Duarte en sus discursos no constituyen un programa político: les falta sistematización, carecen de una elaboración mínima y no están desglosados operativamente, de manera que se especifique cómo

El dilema militar de Duarte estriba en cómo aumentar el poder de la Fuerza Armada y al mismo tiempo depurarla de sus "abusos" y ponerla bajo control.

y cuándo se pretende conseguirlos. Esa falta de explicitación más el tinte fuertemente emocional que arrastran los términos empleados para enunciarlos entraña el riesgo de que cada cual les atribuya un contenido diverso, positivo o negativo según la perspectiva desde donde se juzgue al gobierno de Duarte.

El peligro de diversas interpretaciones, a las cuales se pueda tildar de no corresponder a los planteamientos de Duarte o de distorsionar sus intenciones, es particularmente grande respecto a esas "cinco grandes políticas de la nación" que Duarte ha asumido como bandera de su gobierno. ¿Qué expresan realmente estos términos tan cargados en lo ideológico y emocional? ¿Qué es lo que se está prometiendo al ponerlos como líneas conductoras de la política gubernamental? ¿Hay detrás de cada uno de estos términos un verdadero proyecto político, o más se utilizan como simples *slogans*, cuya generalidad o ambigüedad insinúa todo sin comprometerse a nada precisamente para que cada cual ubique en ellos lo mejor de sus esperanzas y sueños sociales? Con el riesgo de incurrir en errores de interpretación, examinemos las cinco políticas de Duarte a la luz de sus discursos.

a) Humanización

El término "humanización" ha sido utilizado sobre todo para referirse a una forma menos cruel de conducir el conflicto armado, en particular con respecto a la población civil. Se trata de evitar consecuencias nocivas para los sectores no combatientes, ahorrar sufrimientos a las personas civiles que viven en las zonas donde tienen lugar los enfrentamientos, eliminar los actos de terrorismo, conceder un trato digno a los prisioneros de guerra. El respeto a estos principios, consagrados como normas en acuerdos internacionales (por ejemplo, la convención de Ginebra), hacen de la guerra un proceso si no más humano, sí menos inhumano.

Ahora bien, cuando Duarte habla de la humanización del país parece estarse refiriendo a una política más general de respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña, y no sólo a esos aspectos particulares vinculados a las acciones armadas. El hecho de que uno de los problemas que más ha afectado al país, tanto en lo interno como en sus relaciones internacionales, haya sido la sistemática violación de los derechos humanos más básicos por parte de los organismos estatales o paraestatales, ha convertido

al respeto mínimo a esos derechos en un objetivo prioritario para un gobierno que pretende devolver al país la paz y conducirlo hacia la democracia. De ahí que Duarte haya repetido en todos sus discursos y declaraciones que su gobierno mantendrá un total respeto por los derechos fundamentales de la población. En concreto, este respeto se lograría mediante la aplicación de tres políticas: 1) el control a los "abusos de autoridad," eufemismo empleado en el discurso oficial para referirse a las prácticas violatorias de los derechos humanos ejercidas por la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad "maltratos, torturas, secuestros, asesinatos, "desapariciones," bombardeos contra la población civil); 2) la eliminación de los "escuadrones de la muerte," en parte vinculados con lo anterior; y 3) la eliminación de la corrupción, sobre todo en la administración pública.

Duarte ha comprometido formalmente a su gobierno en el logro de estos tres objetivos: "nadie podrá decir que este gobierno ha violado los derechos fundamentales de mi pueblo." No parece, por tanto, impropio traducir con ellos la primera "gran política" de su gobierno.

b) Pacificación

Pacificación es un término que supone un estado de ausencia de paz y un proceso mediante el cual se va estableciendo. En este sentido, parece obvio que, al hablar de "la pacificación de la patria," Duarte se está refiriendo primero y fundamentalmente a la finalización de la confrontación bélica y sólo en segundo lugar al establecimiento de aquellas condiciones vinculadas al desarrollo que garantizan el estado de paz social.

Que la paz sea el objetivo más importante del gobierno de Duarte es algo que parece evidente y así lo ha afirmado solemnemente en varias oportunidades: "desde que asumí la presidencia... estuve consciente de que la principal misión de mi mandato es aquella de lograr y obtener la armonía social y la paz interior de la República." Lo que no es tan evidente es la forma como Duarte pretende conseguir la paz. Dos formas se han presentado como alternativas: la victoria militar o el diálogo y la negociación. En un primer momento, Duarte afirmaba que no iría al diálogo con los insurgentes mientras estos no hubieran depuesto las armas; después, esa condición fue descartada, lo cual permitió tener dos rondas iniciales de diálogo, en La Palma y Ayagualo. Es más, para las elecciones de marzo

La alternativa pacificadora propuesta por Duarte se sitúa entre la victoria militar y la rendición de los insurgentes. Sólo después de pacificado el país tendría lugar el diálogo.

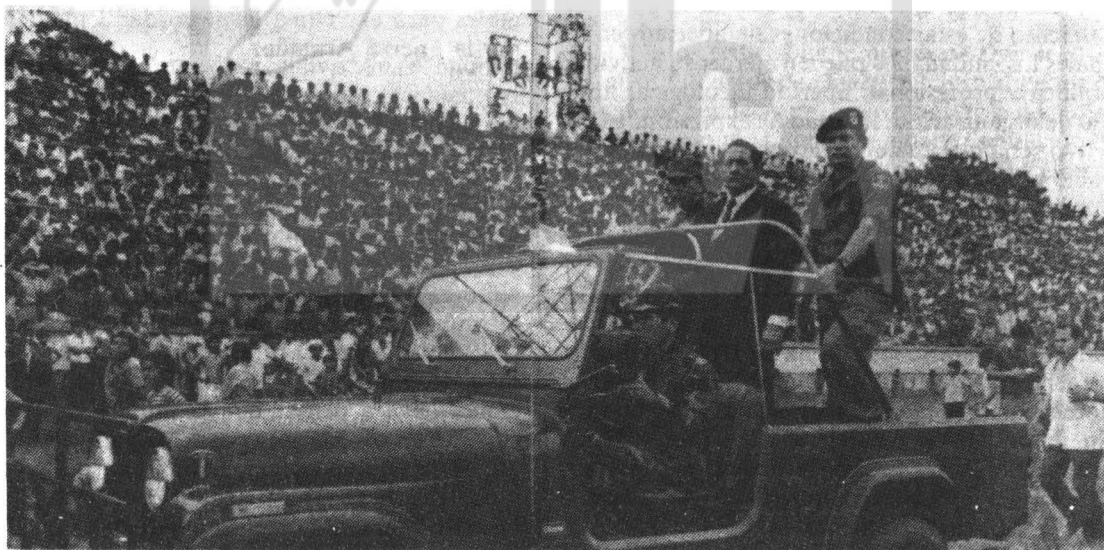
de 1985, la democracia cristiana utilizó la idea del diálogo para la paz como una de sus principales líneas de acción política. Lo cual lleva a pensar que Duarte pretendería buscar la pacificación sobre todo a través del diálogo.

Ahora bien, en diversas ocasiones Duarte ha insistido en que ya no hay razón para que los insurgentes continúen con la lucha armada, puesto que existiría ahora en el país un "clima de seguridad" que les permitiría perseguir sus objetivos por medios pacíficos. Hay mucha ambigüedad en el empleo del término "clima de seguridad," con el cual en unos casos se expresa el cambio operado en la Fuerza Armada, que haría innecesario y aun "antihistórico" el recurso a la vía armada, mientras que en otros se alude precisamente a la necesidad de que la Fuerza Armada prosiga su accionar contrainsurgente. En otras palabras, a veces parecería afirmarse que la seguridad se ha logrado a cambiar a la Fuerza Armada (responsable, por tanto, de la inseguridad), mientras que otras veces parecería que la seguridad la va a lograr la misma Fuerza Armada. En todo caso, la oferta de diálogo de Duarte al FDR-FMLN parte de la hipótesis de que en el país existe ya de hecho una situación nueva, y pone como condición de progreso el que los insurgentes acepten entrar en el marco constitucional

del proyecto político gerenciado por la democracia cristiana y garantizado por el nuevo "clima" de la Fuerza Armada.

El diálogo propuesto por Duarte no pretende por tanto la pacificación del país, sino que la presupone. Para que haya un diálogo que no sea "táctico," los insurgentes tienen que abandonar su lucha, deponer sus armas y entrar en el esquema político de Duarte. La alternativa pacificadora propuesta por Duarte no se sitúa entonces entre victoria militar y diálogo, sino entre victoria militar o rendición de los insurgentes. Sólo después de pacificado el país tendría lugar el diálogo. Con ello, Duarte parece entender la pacificación en el sentido otorgado al término por los norteamericanos, es decir, referida únicamente al accionar de la guerrilla, bajo el supuesto de que el operar de la Fuerza Armada no es contrario, sino más bien garante de la paz y de la seguridad.

Resulta difícil creer que los insurgentes vayan a aceptar este planteamiento que supone su derrota o su rendición. No hay elementos en la "oferta pacificadora" de Duarte que ofrezcan a los insurgentes una alternativa realista a la guerra. Lo cual lleva a la conclusión de que la pacificación propuesta por Duarte de hecho seguirá buscándose por la vía militar y no por la vía



El dilema económico consiste en estimular y fortalecer al sector privado, mientras estimula y fortalece también al sector reformado.

política, por la "seguridad" alcanzada mediante el accionar de la Fuerza Armada, y no por acuerdos negociados entre los contendientes. El gigantesco esfuerzo invertido en el aparato bélico, los continuos aplazamientos al proceso del diálogo y, sobre todo, la inequívoca actitud al respecto mostrada tanto por los principales jefes de la Fuerza Armada como, sobre todo, por la administración Reagan, confirman la validez de esta interpretación sobre el sentido de la pacificación ofrecida por Duarte.

c) Democratización

En los discursos de Duarte el referente principal que da sentido a la democracia es la existencia misma de su gobierno, quizá en contraste con el hecho de que la Fuerza Armada no respetara su elección previa como presidente, en 1972. Los procesos electorales tenidos en 1982, 1984 y 1985 mostrarían la vigencia de un ámbito de libertad en el país en el cual ya se podrían ejercer los derechos democráticos: "hoy en nuestra patria se respira un aire de libertad, los partidos políticos son respetados y fomentados y el pueblo escoge libremente a sus gobernantes." "Por ello me siento orgulloso de ser el primer Presidente electo libremente en El Salvador en los últimos 50 años."

La democratización supondría así el afianzamiento de estas condiciones de libertad, en las cuales los ciudadanos pueden ejercer su actividad política y profesional: libertad ideológica, libertad de organización, libertad de expresión. El objetivo sería que cualquier grupo encontrara el espacio necesario para su quehacer sin más límites que los establecidos por la constitución, "de modo que pueden coexistir las más diversas ideologías." Esto incluiría, por supuesto, la organización y actividad de movimientos gremiales y sindicales y de todo tipo de organizaciones populares. De ahí la insistencia de Duarte a los insurgentes de que, en la "nueva sociedad" salvadoreña, habría espacio para su accionar político sin necesidad de recurrir a las armas. "Estoy ofreciendo la seguridad de un espacio político dentro del esquema democrático pluralista y constitucional que defiende mi gobierno."

La democratización ofrecida tendría como uno de sus objetivos principales el adecuado funcionamiento de aquellas instituciones que garantizan el ejercicio democrático, sobre todo del sistema de justicia. En varias oportunidades Duarte ha ofrecido impulsar una reforma al sistema de justicia salvadoreño, cuya ineficiencia y corrupción han amparado la sistemática e impune violación de los derechos humanos, la arbitrariedad y la prepotencia por parte de los sectores dominantes del país, civiles y militares.

Ahora bien, cuando se pone la democratización ofrecida por Duarte en el contexto global de su propuesta, en particular del objetivo de pacificación, su sentido se restringe notablemente: ejercicio democrático es aquel que tiene lugar al interior del orden establecido por el proyecto de Duarte y garantizado por la "seguridad" que ofrece la Fuerza Armada. Así, toda disidencia política radical y, casi podría decirse, toda verdadera disidencia política, se convierte por lo mismo en alteradora del orden, en actividad subversiva, anticonstitucional y, por tanto, en actividad que debe reprimirse. Si la democracia se refiere fundamentalmente a la presencia de Duarte como presidente, ejercicio democrático significa colaborar con el orden que mantiene el gobierno de Duarte. El pluralismo queda reducido de esta manera a una gama política de opciones que van del centro-derecha a la extrema derecha, aceptables para el "clima de seguridad" mantenido por la Fuerza Armada.

d) Participación

Repetidas veces Duarte ha manifestado que no compartiría con nadie el poder que ha recibido por el voto popular; sin embargo, también ha expresado su deseo de incorporar a "todos los sectores" en su gestión administrativa e incluso afirmó en su discurso inaugural que el "pacto social" constituía "el fundamento esencial" de su plan de gobierno. Este doble tipo de afirmaciones lleva a pensar que la política de Duarte consiste en ofrecer una participación subordinada, es decir, una participación bajo su dirección y control. Esta interpretación concuerda plenamente con el sentido de los objetivos de pacifica-

La nueva economía consiste en una ampliación del sector privado, el cual incluiría a propietarios cooperativistas en régimen de cogestión o autogestión.

ción y democratización. Participación sí, pero en el marco del proyecto establecido, que es el proyecto gerenciado por la democracia cristiana, en cuyo interior se podrán ejercer libremente las libertades democráticas. Quienes no entren en este marco, quienes no acepten este "pacto social," subvierten el orden, alterar la seguridad del Estado, y deben ser reprimidos a fin de lograr la pacificación del país.

Lo que de nuevo podría haber en la oferta de Duarte estriba en la invitación a participar en el gobierno a organizaciones de los sectores populares. De hecho, durante el primer año del actual gobierno se ha introducido en ciertos puestos estatales a representantes de sectores hasta hoy marginados, sobre todo a campesinos miembros de la Unidad Popular Democrática que ha servido como organismo de base popular a la democracia cristiana.

En su primer discurso, Duarte enfatizó también el esfuerzo que se proponía realizar a fin de estimular a los gobiernos locales, particularmente las alcaldías. Finalmente, en el orden económico, la participación propuesta parece significar una interacción más dinámica entre el sector público y el sector privado, así como un incremento del número de empresarios privados, tanto individuales como corporativos.

e) Reactivación económica

La propuesta de reactivación económica parecía apuntar al principio al fortalecimiento de la agricultura, sobre todo mediante la dinamización del sector "reformado," es decir, de los nuevos propietarios agrícolas, y a un funcionamiento diferente del sistema bancario, que trataría de orientar sus esfuerzos hacia los medianos y pequeños productores y hacia las necesidades crediticias de los sectores populares.

Los últimos discursos y actuaciones, sin plantear todavía un proyecto económico claro, han insistido más en el apoyo a los grandes productores y empresarios. Las concesiones hechas a cafetaleros más las garantías ofrecidas al capital privado representan una política de "reactivación económica" que mantiene los esquemas tradicionales del sistema económico salvadoreño,



aunque ahora alimentados por el continuo flujo de dólares procedentes de Washington.

2.2. Puntos críticos de la oferta de Duarte

Los discursos de Duarte, incluso aquellos de los que se puede asumir que han sido cuidadosamente preparados, dejan la amarga sensación de un cúmulo de palabras sin contenido. Si a ellos se añadieran las muchas declaraciones hechas a la prensa, con frecuencia después desmentidas, la sensación se convierte en grave preocupación. Lo menos que se puede decir es que Duarte no ha presentado un verdadero programa político al pueblo salvadoreño. Así, la falta de un programa claro hace que el sentido de las muchas palabras de Duarte tenga que interpretarse de acuerdo a las realizaciones concretas de su gestión gubernamental. No se trata sólo de comprobar si los hechos confirman las palabras; se trata de que sólo a través de esos hechos se puede encontrar el verdadero sentido de sus palabras.

Con todo y aun tratando de limitarnos en lo posible a los términos de su discurso político, aparecen ciertos aspectos críticos. Sin duda, el punto más peligroso radica en la afirmación de Duarte, que parece corresponder a una verdadera convicción, de que en El Salvador ya hay una nueva sociedad, puesto que han ocurrido cambios esenciales. Se diría que para Duarte la prueba irrefutable de esos cambios está en su presencia como presidente, sin cuestionarse siquiera si el sentido de su presidencia hoy es el mismo que el que hubiera tenido en 1972 y si las fuerzas sociales que le respaldan son hoy las mismas que lo hubieran sido entonces. Si los cambios esenciales ya han tenido lugar, lo único que resta es fortalecerlos. Ahora bien, este planteamiento no sólo cierra el horizonte hacia otros cambios necesarios, sino que pone en peligro incluso lo logrado (poco o mucho) por los procesos de cambio ya iniciados, sobre todo en tres ámbitos: el respeto a los derechos humanos, las reformas y la participación de los sectores populares en la dirección de la sociedad.

Ante todo, Duarte parece mantener, no se sabe con cuánta convicción, que se ha producido un cambio radical en el respeto a los *derechos humanos* en el país. Ciertamente, no es éste el lugar para debatir sobre estadísticas. Pero aun aceptando hipotéticamente que se hubiera producido una mejora substancial en ciertos aspectos (torturas, "desapariciones," asesinatos), el problema radica en si el cambio experimentado correspondería a una transformación real o si más bien expresaría una conveniencia táctica.

Aceptar que ya ha cambiado la situación parece asumir que se ha dado una transformación real. Pero hay datos que contradicen este supuesto. Es cierto que ha habido una profesionalización de la Fuerza Armada; pero conviene distinguir si el cambio se refiere a una mayor tecnificación y eficiencia del accionar militar o si toca también otros aspectos. Ciertamente, no ha habido una depuración de aquellos oficiales de quienes se sabe que han estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, ni mucho menos se les ha sometido a la justicia. Y nada se ha hecho hasta ahora para cambiar el sistema de justicia imperante en el país, que sigue mostrando la misma ineficiencia y corrupción

que en el pasado. Por supuesto, es posible que esta reforma se realice en lo que resta del período presidencial de Duarte y no sería justo reclamar al cabo de un año aquello para cuyo cumplimiento se dispone de cinco. Lo que aquí se cuestiona no es que todavía no se haya realizado la reforma judicial, sino que, no habiéndose realizado, se afirme que ya existe en el país una nueva realidad. La postura de Duarte, e incluso la expresada por algunos altos jefes militares, respecto al comportamiento de los militares y cuerpos de seguridad parecería ser la de "borrón y cuenta nueva." Pero resulta difícil creer en la posibilidad de un cambio institucional cuando se dejan intactas las raíces del problema, tanto estructurales como personales. El contraste con el caso de Argentina, donde incluso ex-presidentes están siendo llevados a juicio para responder por las violaciones en las cuales sus gobiernos estuvieron involucrados, pone al descubierto el carácter y magnitud del cambio operado en El Salvador.

Por otro lado, Duarte ha negado públicamente las más recientes violaciones a los derechos humanos que involucran a la Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad, en ocasiones contra toda evidencia, como es el caso de los bombardeos contra poblaciones civiles en las zonas conflictivas del país. Esta negación de hechos más la presunción de que ya se han eliminado "los abusos de autoridad" pone en duda la voluntad política de lograr una situación de "respeto total a los derechos humanos," al menos por parte de las instituciones gubernamentales. Si a ello se añade el que no sólo ningún "escuadrón de la muerte" ha sido desmantelado, pero ni siquiera se sabe de algún esfuerzo sistemático por lograr ese fin, resulta más que peligrosa la afirmación de que las cosas ya han cambiado y la inferencia, más o menos implícita, de que ya nada tiene que cambiar.

Otro de los puntos propuestos por Duarte como parte de su política de respeto a los derechos humanos consiste en la eliminación de la corrupción, sobre todo en la administración pública. Sin embargo, el gobierno de la democracia cristiana ha podido ser acusado por sus opositores de prácticas en nada diferentes a las criticadas en administraciones anteriores, acusaciones por lo general basadas en hechos reales. Una vez

Los objetivos planteados por Duarte no constituyen un programa político: les falta sistematización, carecen de una elaboración mínima y no están desglosados operativamente.

más, pretender que la situación ha cambiado al respecto supondría no sólo negar la necesidad de un cambio real, pero incluso amparar nuevas formas de corrupción administrativa.

Otra área de la oferta de Duarte que entra en cuestión frente al juicio de que la situación salvadoreña ya ha cambiado es la concerniente a *las reformas sociales*. Es un hecho que, desde 1980, se han iniciado en el país la reforma agraria y la reforma del sistema bancario. Ahora bien, el control que tuvieron sobre la asamblea constituyente los partidos de extrema derecha, encabezados por ARENA, les permitió bloquear constitucionalmente la ejecución de la parte medular de la reforma agraria, incluida en la "segunda fase." Además, la presencia de representantes de estos partidos durante el gobierno del Dr. Magaña en los ministerios e institutos encargados de la reforma agraria hizo que pudieran tomar una serie de medidas de hecho encaminadas a desvirtuar en la práctica sus efectos más significativos sobre la estructuración económica del país. Aun cuando la democracia cristiana goza en los momentos actuales de la mayoría en la asamblea y ha quitado a los partidos de extrema derecha el control sobre los ministerios e institutos vinculados con la reforma agraria, la afirmación de que los cambios ya se han producido y de que en el país existe ya una nueva realidad agraria podrían estar expresando la voluntad de no recuperar el terreno perdido para no entrar en conflicto con los terratenientes y, sobre todo, la decisión de no proseguir con la reforma tal como estaba originariamente concebida. Esta decisión podría incluso ocasionar la pérdida de los logros ya alcanzados con la reforma, al no tomar aquellas medidas complementarias que les de viabilidad técnica, financiera y social.

Finalmente, no está claro en la oferta de Duarte si la *participación* que ofrece pretende la incorporación efectiva en el gobierno de las organizaciones representativas de los diversos sectores sociales o si más bien se propone incluir a miembros de esos sectores pero en términos individuales. La diferencia es esencial tanto en su alcance como en sus consecuencias: una cosa es poner a un campesino al frente de una institución u organismo estatal, y otra muy diferente es hacer posible que las organizaciones campesinas adquieran voz y voto en la dirección de esa institución u organismo.

Una serie de declaraciones y hechos llevan a pensar que la participación ofrecida por Duarte

es de orden individual (representativa o no, ése es otro problema), y no social o gremial. El creciente desacuerdo mostrado por la UPD sobre la política desarrollada por el gobierno democristiano en las áreas más significativas (pacificación, derechos humanos, recuperación económica), a pesar de la inclusión de algunos de sus miembros en cargos significativos, pone de manifiesto la falta de una participación satisfactoria en la dirección del país.

Más estrecho se percibe aún el espacio real ofrecido a otros grupos sociales. Resulta particularmente llamativo el sistemático desplazamiento de los puestos administrativos con algún poder de quienes no pertenecen a la democracia cristiana para llenarlos con miembros de ese partido político, independientemente de su preparación para esos cargos. Pero de mayor gravedad y significación políticas es el tratamiento otorgado a los grupos sindicales tan pronto como han echado mano de sus únicos recursos de presión (los paros, las huelgas, las manifestaciones y ocupaciones) para lograr que su voz sea escuchada y



Ejercicio democrático es aquel que tiene lugar al interior del orden establecido por el proyecto de Duarte y está garantizado por la "seguridad" ofrecida por la Fuerza Armada.

sus demandas reivindicativas atendidas. Descalificar esas demandas acusando a los sindicalistas de pertenecer al FMLN y de perseguir una táctica de desestabilización, es recurrir a viejas argumentaciones ideológicas amparo típico de la intransigencia y de la represión política y, ciertamente, es cerrar el espacio a la disidencia y a la representación de los intereses sociales de la mayoría del pueblo salvadoreño. En este contexto, resulta difícil entender qué pueda significar la participación ofrecida por Duarte a no ser una para corear sumisamente las políticas por él gerenciadas (ya que no siempre ideadas) o para aprovechar individualmente los beneficios que se derivan del poder (popularmente calificados como "componerse").

Estas inconsistencias del discurso político de Duarte, las cuales afectan al meollo de su oferta (los derechos humanos, las reformas y la participación), delimitan el peligro fundamental de lo que realmente promete al país. La duda estriba en si lo que se pretende es lograr un cambio real del país o más bien un cambio de su imagen. Obviamente, el problema no es de simples intenciones subjetivas; el problema es, más bien, de determinaciones objetivas. En este sentido, las imprecisiones formales del discurso de Duarte (hablar sin definir, enunciar sin precisar, proponer sin concretar), las posibles contradicciones en sus declaraciones, solamente salvables cuando se mantienen en el plano de la abstracción, pueden estar amparando una falta real de poder para ejecutar sustancialmente los objetivos propuestos en el sentido real de los términos.

A lo largo de los cinco puntos de la oferta de Duarte hay un hilo conductor: la invitación a incorporarse al proceso, a participar en el proyecto político gerenciado por la democracia cristiana. Ideológicamente, esta invitación ha sido presentada como el establecimiento de un "pacto social," al que con razón Duarte califica como "el fundamento esencial" de su gobierno. Se prome-

te respeto a los derechos humanos, democracia y reactivación económica a quienes acepten las reglas del nuevo juego impuesto al país. Quien rechaza esas reglas, tendrá que atenerse a las consecuencias de su postura subversiva y recibir todo el peso de la represión pacificadora.

Esta línea política de "zanahoria y garrote" confluye casi en forma literal con los cuatro objetivos que la administración norteamericana de Reagan dicen pretender para Centroamérica y, en concreto, para El Salvador. En este sentido, la palabra ideológica de Duarte parece ser un simple eco de la palabra ideológica de Reagan, así como el nuevo "clima de seguridad" que se busca establecer en el país parece reflejar el objetivo de "seguridad nacional" estadounidense para el área centroamericana. Si esto fuera así, significaría que la oferta de Duarte constituye la versión criolla del proyecto norteamericano para el país. No deja de ser significativo al respecto el hiriente contraste entre la promesa de una política exterior de "absoluta independencia," y el creciente sometimiento a las conveniencias de la administración Reagan, a los intereses de su política de confrontación mundial, al ejercicio de su hegemonía regional frente al grupo de Contadora y hasta a los vaivenes de su política interior.

Hay una promesa que Duarte sí ha formulado con claridad al pueblo salvadoreño y a la cual parece estar dedicando lo mejor de sus esfuerzos: la de que cambiaría la imagen del país. Pero ello mismo hace temer que la oferta política de Duarte no pase de ser el maquillaje referido por el proyecto norteamericano de "pacificación," la apariencia cosmética que necesita Estados Unidos para mantener su control hegemónico sobre el país y deshacerse del reto revolucionario popular planteado por el FDR-FMLN. Y, de nuevo, que así lo sea no es asunto de intenciones subjetivas, sino de la intencionalidad objetiva de los procesos puestos en ejecución.